IX. REEXAMEN INTERMEDIO

9.1 El 19 de diciembre de 1997, los Estados Unidos y el Japón solicitaron al Grupo Especial que reexaminara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, aspectos concretos del informe provisional que se había emitido a las partes el 5 de diciembre de 1997. Ni los Estados Unidos ni el Japón solicitaron que se celebrara una nueva sesión del Grupo Especial con las partes. En carta de fecha 12 de enero de 1998, los Estados Unidos presentaron una respuesta a ciertas observaciones del Japón sobre el informe provisional. En carta de fecha 21 de enero de 1998, el Japón respondió a algunas de las observaciones de los Estados Unidos sobre las observaciones del Japón.

9.2 Atendiendo a las observaciones del Japón sobre la parte descriptiva, hemos modificado los párrafos 2.5, 2.9, 2.14, 2.226, 5.412, 6.309, 6.334, 6.441 y 6.466.

9.3 Los Estados Unidos expresan su neta discrepancia con las constataciones y conclusiones jurídicas del Grupo Especial. Los Estados Unidos reiteran que el Gobierno japonés socavó las ventajas que los Estados Unidos legítimamente esperaban que resultarían de una serie de concesiones arancelarias que habían negociado de buena fe a lo largo de más de 30 años. Se recrimina además al Japón el haber frustrado los propósitos del proceso de negociación del GATT promulgando una serie de medidas que según se dice han creado un tejido interconectado de protección que ha resultado difícil de detectar y entender incluso después de tres años de intensa investigación e indagación. A la luz del amplio carácter de sus objeciones, los Estados Unidos estiman imposible formular observaciones párrafo por párrafo, por lo que, en vez de ello, se extienden sobre algunas de las principales deficiencias que, en su opinión, impregnan el informe especial.

9.4 Primeramente, los Estados Unidos critican que el Grupo Especial no reconociese el funcionamiento ni los efectos combinados de las contramedidas relativas a la liberalización que, a su entender, afectaban directamente las constataciones referentes al apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. Los Estados Unidos sostienen que, como resultado de la combinación de medidas, más que de alguna en particular, el Japón creó una estructura de mercado que mantiene los materiales fotográficos extranjeros fuera del mercado japonés y la ha mantenido hasta el presente. A nuestro parecer, esta crítica es infundada, ya que examinamos las pruebas y los argumentos de las partes sobre los efectos combinados de las medidas en los párrafos [10.350 a 10.367] de las constataciones.

9.5 En segundo lugar, los Estados Unidos arguyen que el informe provisional interpreta que el requisito de la "justificación detallada" impone un nivel probatorio más estricto en los casos en que no existe infracción, mientras que para los Estados Unidos se trata de un requisito procesal, es decir, de un filtro que permite al Grupo Especial desechar en esos casos las reclamaciones insuficientemente sustanciadas. Los Estados Unidos subrayan que el hecho de que el apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII prevea un remedio excepcional no justifica exigir un nivel de prueba más estricto que el aplicado conforme a otros artículos del GATT. Recordamos que en el párrafo [10.84] afirmamos que "en esta etapa de las actuaciones, la cuestión es saber si una medida ha causado la anulación o el menoscabo, es decir, si ha hecho más que una contribución *de minimis* a la anulación o el menoscabo". En nuestra opinión, no aplicamos el requisito de la "justificación detallada" como un patrón más exigente en materia de prueba. Atendiendo a las observaciones de los Estados Unidos modificamos, entre otras cosas, la redacción de los párrafos [10.50, 10.60, 10.61, 10.80, 10.111, 10.126, 10.140, 10.153, 10.166, 10.184, 10.198, 10.219, 10.232, 10.258, 10.271, 10.286, 10.303, 10.308, 10.309, 10.317, 10.319, 10.331, 10.338, 10.346, 10.357 y 10.363] para que esto quedase más claro.

9.6 En tercer término, los Estados Unidos entienden que muchas de las constataciones de hecho del Grupo Especial prescinden de pruebas que los Estados Unidos estiman sustanciales. En particular, los Estados Unidos niegan que la injerencia del Japón en el sistema de distribución obedeciera al propósito de modernizarlo. Sostienen que han presentado al Grupo Especial una cantidad sustancial de pruebas de la finalidad proteccionista, los efectos de las circunstancias singulares del sistema de ajuste concertado entre el Gobierno y la industria y las peculiaridades del sistema japonés de distribución en el sector de las películas. Rechazamos la manera como los Estados Unidos caracterizan nuestras constataciones sobre esta cuestión, en el sentido de que prescinden de pruebas sustanciales.

9.7 En cuarto lugar, los Estados Unidos aducen que, si bien obraban en su conocimiento la Ley de Grandes Tiendas, la Ley de Premios y la Ley Antimonopolio cuando se celebraron la Ronda de Tokio y la Ronda Uruguay, no podían conocer ni conocían hasta qué punto el sistema cerrado de distribución del Japón para los materiales fotográficos era el resultado del efecto combinado de las medidas en materia de distribución o que las contramedidas relativas a la distribución, la Ley de Grandes Tiendas y las contramedidas relativas a la promoción cooperaban para dificultar el acceso al mercado e impedir que se desarrollase la competencia de precios y de otra índole. Los Estados Unidos hacen hincapié en que el conocimiento de la existencia de estas leyes y de sus disposiciones fundamentales no equivalía al conocimiento del funcionamiento real de las medidas. Aunque aceptamos expresamente que, en el momento de su publicación, podía escapársele a un Miembro el efecto de la aplicación de una medida, a nuestro juicio, los Estados Unidos no demostraron en general que no debiera suponerse ese conocimiento en el presente caso.

9.8 En quinto término, los Estados Unidos argumentan que la decisión del Grupo Especial de que se supone que una parte reclamante conoce las medidas del gobierno demandado desde la fecha de su publicación sugiere una regla de *caveat emptor* que actuaría como disuasivo para la celebración en el futuro de negociaciones arancelarias. En opinión de los Estados Unidos, esto entrañaría para los negociadores de los diversos países la necesidad de efectuar sector por sector una investigación de gran magnitud antes de aceptar ninguna concesión, para evitar que se le imputara "previsión" acerca de medidas administrativas no transparentes que podrían llegar a menoscabar las ventajas resultantes de la concesión. Los Estados Unidos creen que ningún país puede desarrollar un esfuerzo tan masivo en el curso de negociaciones multilaterales amplias, porque los países se enfrentarían con grandes dificultades para descubrir las múltiples medidas que pueden anular o menoscabar las concesiones arancelarias para los cientos de productos de que se trata. Rechazamos la manera como los Estados Unidos describen el análisis que hemos efectuado en este aspecto. Es correcto afirmar que partimos del supuesto de que, en general, debe suponerse que un Miembro conoce una medida desde la fecha de su publicación. Pero además, también aceptamos expresamente que esta presunción podía ser destruida si un Miembro demostrase que, por razones concretas, no era razonable que hubiese previsto una medida. Por contraste, la amplia posibilidad de demostrar lo contrario según el criterio sugerido por los Estados Unidos podría, a nuestro parecer, llevar a constataciones capaces de socavar la seguridad y la predecibilidad del sistema multilateral de comercio.

9.9 Finalmente, los Estados Unidos concuerdan con el Grupo Especial en que no es necesario que una medida otorgue ventajas o imponga obligaciones jurídicamente vinculantes o su equivalente sustantivo a los efectos de las reclamaciones en los casos en que no existe infracción, y que la "prueba de los incentivos y los desincentivos" elaborada por el Grupo Especial que examinó el asunto *Japón - Semiconductores* no es la prueba exclusiva ni el límite extremo de lo que pueda constituir una medida conforme al apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. Los Estados Unidos solicitan además al Grupo Especial que aclare que el carácter vinculante de una medida es un factor pertinente -aunque no decisivo- en un análisis

para determinar si algo constituye o no una medida. Coincidimos con los Estados Unidos en que la prueba no es exclusiva y, cuando correspondía, aclaramos nuestra postura en la parte general de las constataciones y en nuestro examen de "medidas" concretas en discusión.

9.10 El Japón destaca que sus observaciones obedecían en general al propósito de mejorar las constataciones de hecho y el razonamiento jurídico en apoyo de las conclusiones a que llegaba el Grupo Especial en su informe provisional.

9.11 La mayoría de las observaciones concretas del Japón se refieren al análisis que efectuó el Grupo Especial sobre cuáles de los conceptos objeto de reclamación habían de considerarse medidas en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. En particular, el Japón solicita al Grupo Especial que explique qué otros criterios, además de la "prueba de los incentivos y los desincentivos" sugeridas por el Grupo Especial que examinó el asunto *Japón - Semiconductores* son pertinentes a este respecto. A juicio del Japón no existe diferencia sustancial entre las pruebas desarrolladas por el Grupo Especial que examinó el asunto *Japón - Semiconductores* y las del Grupo Especial que examinó el asunto *Japón - Productos agropecuarios*, porque las primeras son simplemente un desarrollo de las segundas. El Japón propone además que se aclare que la prueba o las pruebas del Grupo Especial se ciñen a las mismas supuestas medidas y al modo como funcionan, y no se refieren a las presuntas consecuencias de las medidas, es decir, las actuaciones de partes privadas o las corrientes comerciales. En concreto, según el parecer del Japón, el asunto *Japón - Semiconductores* no se refería a actuaciones privadas que se estiman de carácter oficial sino a medidas realmente adoptadas por el Gobierno japonés. Hemos ajustado los párrafos [10.49 y 10.50] para que quede más clara nuestra lectura de los informes de los Grupos Especiales que examinaron los asuntos *Japón - Semiconductores* y *Japón - Productos agropecuarios* sobre la cuestión de qué constituye una medida gubernamental.

9.12 El Japón estima que es inexacto caracterizar la relación entre gobierno y empresas en el Japón por un alto grado de cooperación y colaboración. En particular, objeta que el Grupo Especial utilice tal "simplificación" en el contexto de una prueba generalmente aplicable para determinar qué constituye una medida. En su lugar, el Japón propone que el Grupo Especial analice esas circunstancias concretas sólo cuando la prueba general se aplique a casos particulares. Hemos modificado el razonamiento del párrafo [10.49] sin cambiar nuestro criterio básico de analizar la relación entre gobierno y empresas tanto en la parte general de las constataciones como en el marco de nuestro examen de las "medidas" concretas que se discuten.

9.13 Además, el Japón propone que se aclare qué es la "orientación administrativa permanente" impartida para perpetuar las políticas subyacentes lo que resulta impugnabile como medida, no una actuación pública revocada en sí misma que deja de existir, por lo que no puede estar vigente. Aclaramos el párrafo [10.59] en consecuencia.

9.14 En principio, el Japón prefiere el criterio del Grupo Especial de partir de presunciones afirmativas con respecto a algunos elementos y proceder luego a considerar otros elementos, con el fin de completar el examen de todos los demás que se plantean en el contexto de una reclamación en un caso en que no existe infracción. No obstante, en opinión del Japón, este criterio no requiere que el Grupo Especial formule constataciones sobre los elementos a los que acompañan pruebas insuficientes o contradictorias. En esos casos, sostiene el Japón, la duda debe inclinarse contra la parte sobre la que pesa la carga de la prueba. En consecuencia, se insta al Grupo Especial a que se limite a expresar su suposición sin formular una constatación acerca de si un concepto constituye una medida en el ámbito del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. Atento a ello, modificamos el párrafo [10.60] para que dijese "adoptaremos una interpretación amplia sobre qué constituye una medida [...]". Sin embargo,

cuando consideramos que las pruebas eran suficientes, hicimos constataciones sobre cuáles de las medidas concretas que se discutían constituían medidas en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII, en vez de limitarnos a manifestar suposiciones, como sugería el Japón.

9.15 Además, el Japón solicita al Grupo Especial que modifique su constatación de que pueden en principio continuar existiendo expectativas razonables respecto de concesiones arancelarias en rondas sucesivas de negociaciones relacionadas con el artículo XXVIII*bis*. El Japón reitera su postura de que en este caso sólo son pertinentes las ventajas derivadas de las concesiones arancelarias de la Ronda Uruguay, porque debe estimarse que la última negociación arancelaria ha creado una nueva expectativa acerca del saldo resultante de las concesiones y ha reemplazado cualquier expectativa razonable surgida en una anterior negociación arancelaria. A juicio del Japón, el Grupo Especial que examinó el asunto *CEE - Semillas oleaginosas* se centró en la cuestión de si se había o no creado un nuevo equilibrio de concesiones (es decir, una revaluación global del valor de todas las concesiones de la CEE) y no sobre la cuestión de los procedimientos y formalidades con arreglo a las cuales se llevó a cabo la negociación arancelaria. Añadimos un texto al párrafo [10.68] que refleja la constatación del Grupo Especial que examinó el asunto *CEE - Semillas oleaginosas* de que en ese caso "el equilibrio de las concesiones negociadas en 1962 [...] no se alteró". Con todo, este argumento no es determinante para nuestra constatación en el párrafo [10.70]. Por consiguiente, seguimos considerando que pueden coexistir expectativas razonables respecto de concesiones arancelarias en rondas sucesivas de negociaciones relacionadas con el artículo XXVIII*bis*.

9.16 Otras observaciones del Japón se refieren a la cuestión de si una medida causa la anulación o el menoscabo de ventajas derivadas de concesiones arancelarias en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. El Japón señala que no aboga ni ha abogado por un patrón de causalidad "si no fuera por". Por el contrario, según el parecer del Japón, debe probarse que hay una vinculación clara entre la medida de que se trate y la supuesta anulación o el supuesto menoscabo mediante una "justificación detallada" para poder establecer la necesaria relación de causa efecto. Atendiendo a la observación del Japón, ajustamos el texto del párrafo [10.84]. Finalmente, el Japón propugna un patrón de causalidad más estricto que el del Grupo Especial de "una contribución más que *de minimis*" que, en opinión del Japón, subestima el grado de relación de causalidad requerido conforme al apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. Discrepamos de la postura del Japón y, en consecuencia, no hemos modificado el texto a este respecto.

9.17 En lo que se refiere a las medidas en materia de distribución de que se trata, el Japón insta al Grupo Especial a que deje claro que tanto la caracterización de que la Decisión del Consejo de Ministros de 1967, los Informes Provisionales Sexto y Séptimo y el Estudio de 1969 son medidas en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII como su afirmación de que las supuestas medidas están aún en vigor, son suposiciones y no constataciones. Revisamos cuidadosamente nuestro razonamiento y hemos hecho las modificaciones adecuadas para que quede más claro cuándo hicimos constataciones y cuándo partimos de supuestos.

9.18 El Japón subraya que la Decisión del Consejo de Ministros de 1967 se publicó en *Kampo* (es decir, el Diario Oficial del Gobierno del Japón) el 21 de junio de 1967, antes de la conclusión de la Ronda Kennedy el 30 de junio de 1967. Por consiguiente, a juicio del Japón, los Estados Unidos deberían razonablemente haber previsto la Decisión del Consejo de Ministros de 1967 antes de la Ronda Kennedy. Los Estados Unidos responden que no tuvieron la oportunidad ni la previsión de reabrir las negociaciones sobre productos concretos nueve días antes de la conclusión de la Ronda Kennedy sobre la base de la publicación de esta

medida en japonés. Por consiguiente, los Estados Unidos solicitan al Grupo Especial que mantenga su constatación de que los Estados Unidos no podían haber razonablemente previsto la Decisión del Consejo de Ministros de 1967 por la proximidad entre la fecha de publicación de esa medida y la conclusión de la ronda de negociaciones arancelarias multilaterales. En vista de las observaciones de las partes y aplicando el criterio desarrollado en los párrafos 10.79 a 10.81, modificamos los párrafos [10.103, 10.106, 10.247 y 10.251].

9.19 El Japón discrepa de las constataciones del Grupo Especial concernientes a la imputabilidad al Gobierno de las Directrices de 1970 y el Plan Básico de 1971. Como postura alternativa, el Japón sostiene que unas sugerencias no vinculantes podrían cuando mucho tener un efecto *similar* -pero no *el mismo* efecto- como medidas jurídicamente vinculantes. Mantenemos nuestras constataciones de que ambos conceptos mencionados deben considerarse medidas en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. No obstante, aceptamos la propuesta alternativa del Japón y aclaramos que unas sugerencias no vinculantes podían ejercer un efecto *similar* al de unas medidas jurídicamente vinculantes. En consecuencia, modificamos los párrafos [10.49, 10.161 y 10.180].

9.20 Además, el Japón formula propuestas detalladas sobre cómo hacer más uniforme el razonamiento del Grupo Especial con respecto a la presunta "vigencia permanente" de ciertas "medidas" (es decir, la Decisión del Consejo de Ministros de 1967, los Informes Provisionales Sexto y Séptimo, el Estudio de 1969, las Directrices de 1970, el Plan Básico de 1971 y el Manual de 1975). Aceptamos en gran parte estas sugerencias y armonizamos la redacción de los párrafos [10.123, 10.137, 10.150, 10.163, 10.181 y 10.195].

9.21 En cuanto a la repercusión de la Ley de Grandes Tiendas sobre la relación de competitividad entre los productos nacionales y los importados, el Japón mantiene la postura de que las ventajas que se derivan de las concesiones arancelarias conforme al artículo II consisten en la expectativa legítima de que las oportunidades de acceso al mercado, o unas mejores condiciones de competencia, para las importaciones creadas por las concesiones arancelarias no se verán frustradas como consecuencia de ninguna medida oficial. Pero, en opinión del Japón, entre las ventajas conforme al artículo II no figuran las expectativas acerca de la evolución del mercado, porque los cambios de situación en este aspecto pueden ser el resultado de diversos factores, como las fuerzas del mercado y las prácticas privadas, independientemente de la existencia de pretendidas medidas oficiales. Modificamos el párrafo 10.232 a efectos de aclarar nuestro razonamiento sobre este punto.

9.22 Con respecto al establecimiento del Consejo de *Promoción* Leal del Comercio en 1982, el Japón sigue negando que el Consejo de Promoción constituya un consejo de comercio leal establecido con arreglo a un código de competencia leal con la aprobación de la JFTC, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Premios. Según el Japón, el Consejo de *Promoción* Leal del Comercio fue creado por empresas privadas sin ninguna conexión con entidades públicas japonesas. Destacamos que nuestra constatación no se basaba en sí la creación del Consejo de Promoción fue aprobada por la JFTC, sino en nuestra apreciación de que en ciertos casos la relación entre el Consejo de Promoción y la JFTC era suficientemente estrecha para justificar una constatación de que las actuaciones del Consejo de Promoción deben estimarse imputables al Gobierno japonés.

9.23 Por lo que respecta a las Medidas de autorregulación relativas a la lealtad en las relaciones comerciales de 1982 y las Normas de autorregulación de 1984, el Japón reitera su argumento de que estas "medidas" no fueron aprobadas por la JFTC como códigos de competencia leal. El Japón entiende que, en especial, las "medidas" relativas a personal volante caen fuera del ámbito de las reglamentaciones sobre premios y representaciones que inducen a error. El Japón argumenta además que la interacción entre la JFTC y el sector

durante la formación de las Medidas de autorregulación de 1982 no fue intensa. Por consiguiente, sostiene que estas "medidas" están relacionadas de manera demasiado tangencial con la JFTC para imputarlas al Gobierno japonés en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. Además, aun en el supuesto de que quede probada la existencia de una conexión suficiente con el Gobierno japonés, el Japón señala que las partes privadas no consideran jurídicamente vinculantes las Medidas de autorregulación de 1982. En la medida en que estas partes no pueden libremente pedir a los proveedores que les envíen personal volante, el Japón afirma que esto es consecuencia directa de la aplicación de la misma Ley Antimonopolio y no de que las Medidas de autorregulación de 1982 puedan asimilarse a una medida oficial. Con respecto a las Normas de autorregulación de 1984, la JFTC se limitó a responder a la consulta del Consejo de Promoción Leal del Comercio sobre la licitud de estas Normas conforme a la Ley Antimonopolio y la Ley de Premios. A criterio del Japón, pues, las Normas de autorregulación de 1984 no son imputables al Gobierno japonés porque la relación de la JFTC con estas normas es demasiado lejana. Examinamos cuidadosamente nuestras constataciones sobre esta cuestión a la luz de los argumentos planteados, pero no nos convencimos de que fuera necesario modificarlas en armonía con la postura del Japón.

9.24 El Japón objeta en general la conclusión del Grupo Especial de que los códigos de competencia leal y las actividades concretas de los consejos de comercio leal constituyan medidas gubernamentales en el ámbito del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. En particular, el Japón señala que la aprobación de un código de competencia leal por parte de la JFTC no entraña ninguna delegación de facultades cuasigubernamentales a un órgano privado como es un consejo de comercio leal. Además, según el Japón, la aprobación de la JFTC no concede inmunidad frente a las disposiciones sustantivas de la Ley Antimonopolio y las actuaciones concretas que queden fuera del código son plenamente impugnables conforme a dicha Ley. El Japón reitera también su argumento de que un consejo de comercio leal no goza de ninguna facultad sobre quienes no sean miembros suyos, los cuales no están obligados a afiliarse al consejo. En opinión del Japón, un gobierno no debe ser tenido por responsable de ninguna actuación de asociaciones privadas meramente por el hecho de la aprobación que haya dado en ciertos aspectos. Tras haber reexaminado nuestro análisis de esta cuestión, no vemos razón alguna para modificar nuestro razonamiento sobre estos puntos.

9.25 Además, el Japón solicita al Grupo Especial que formule una constatación explícita de que el Código de Competencia Leal de los Minoristas sólo abarca las cámaras y los productos conexos pero no es aplicable a las películas ni al papel fotográfico. El Japón observa que - prescindiendo de si un código de competencia leal debe o no asimilarse a una medida gubernamental- la JFTC está facultada para interpretar el alcance de la aprobación concedida conforme a la Ley de Premios y nunca ha permitido ni tiene intención de permitir que el Código de los Minoristas se aplique a las películas o el papel. Además, el Japón aduce que la declaración de un miembro del sector citada en Zenren Tsuho ("[...] me esforzaré para que los materiales fotosensibles y el revelado y la obtención de copias queden comprendidos en el código") demuestra que el Código de los Minoristas no era aplicable a las películas o el papel fotográficos. Consideramos, empero, que las pruebas presentadas no eran concluyentes y decidimos suponer simplemente que el Código de los Minoristas podía también aplicarse a las películas y el papel fotográficos.

9.26 En nuestro examen de las pretensiones formuladas invocando el artículo III, razonamos que las expresiones *leyes*, *reglamentos* y *prescripciones* de ese artículo debían interpretarse en el sentido de que abarcaban una gama análogamente tan amplia de actuaciones públicas, y de actuaciones de partes privadas susceptibles de ser asimiladas a las actuaciones públicas, como las actuaciones comprendidas en el término *medida* en el apartado

b) del párrafo 1 del artículo XXIII. Según el parecer del Japón, la palabra *prescripción* debe significar algo diferente de *medida*, y la primera es probablemente de alcance más limitado que la segunda. Se solicita al Grupo Especial que explique con mayor detalle la diferencia entre estas dos palabras, especialmente con respecto a la Decisión del Consejo de Ministros de 1967, el Plan Básico de 1971 y las Directrices de 1970, y que se limite a suponer simplemente que estos conceptos son *prescripciones* en el sentido del artículo III. Atendiendo a la observación del Japón, modificamos los párrafos [10.376 y 10.377].

9.27 Finalmente, el Japón sugiere que se ahonde en el análisis sobre si las "medidas" que se discuten otorgan un trato menos favorable a los productos importados en contravención al artículo III. A juicio del Japón, esto podría hacerse repitiendo, o remitiéndose a él, el examen del Grupo Especial acerca de si la integración vertical y una distribución de marca única en general, y las Directrices de 1970 y el Plan Básico de 1971 en particular, han causado un trastorno de la relación de competencia entre los productos nacionales y los extranjeros en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII. Coincidiendo con la observación del Japón, decidimos desarrollar nuestro razonamiento en el párrafo [10.381], en particular con respecto a las dos medidas concretas antes mencionadas.

9.28 Atendiendo a otras observaciones del Japón, rectificamos incorrecciones de hecho, especialmente en los párrafos [10.103, 10.104, 10.106, 10.128, 10.146, 10.160, 10.207, 10.208, 10.211, 10.247, 10.249 y 10.296]. Además, cuando estimamos de recibo algunas sugerencias concretas del Japón, ajustamos los párrafos [10.87, 10.148, 10.194, 10.205, 10.298, 10.299, 10.302, 10.316, 10.345, 10.353].